



República del Ecuador
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL

Aprobada en sesión del Pleno
de 26 de marzo de 2009, con
observaciones

R. Ortiz
Secretaría

ACTA No. 0039 – TCE – 2009

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL
CORRESPONDIENTE AL JUEVES 12 DE MARZO DEL 2009.**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del dos mil nueve, siendo las 10H30, sesiona el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con la Presidencia de la Dra. Tania Lizbeth Arias Manzano, y la asistencia de las señoras y señores miembros principales Dra. Ximena Verónica Endara Osejo, Vicepresidenta, Dra. Carmina Alexandra Cantos Molina, Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes y Dr. Arturo Javier Donoso Castellón.

Actúa en la Secretaría su titular doctor Richard Ortiz Ortiz.

Se constata el quórum reglamentario y se aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

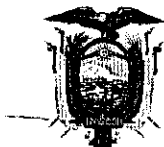
PUNTO ÚNICO:

**CRITERIOS GENERALES RESPECTO DE LOS RECURSOS
PRESENTADOS EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.-**

Por disposición de la señora Presidenta se da lectura de los oficio No 156 y 160-2009-CC-II-S de 10 de marzo del 2009, suscritos por el Dr. Mauricio Montalvo, Secretario General, Segunda Sala (E) de la Corte Constitucional, mediante los cuales remite copia debidamente certificada de la providencia, del caso signado con el número 0084-09-EP dictada el día 10 de marzo de 2009 y de la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por el señor Manuel Elías Espinoza Barzallo; y, comunica la providencia signada con el No. 0084-09-EP dictada el día 11 de marzo de 2009, documentación que se adjunta para los fines legales pertinentes.

El señor Dr. Arturo Donoso manifiesta que en materia electoral el Tribunal Contencioso Electoral está sobre la Corte Nacional de Justicia con jurisdicción y competencia absolutamente privativa. La propia Constitución determina que la Corte Constitucional puede revisar las sentencias con autoridad de cosa juzgada, siendo una falla de la Constitución porque nunca habrá seguridad jurídica en el país, pero en materia electoral no se da, por varios argumentos: primero, aunque se llame Tribunal es una Corte, con jerarquía, jurisdicción y competencia privativa en materia electoral; segundo, los plazos en materia electoral son fatales y los magistrados de la Corte Constitucional se han dado

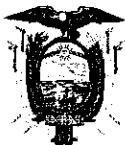
R. Ortiz



cuenta de ello, por eso es que cambian la fecha de la audiencia, pero nadie puede intervenir en un proceso electoral que es privativo de la Función Electoral, ni el Consejo Nacional podría dar paso a una de estas acciones, porque se estaría poniendo en riesgo el proceso electoral, si la Corte Constitucional acepta el recurso y llega a dictar sentencia contra las sentencias del Tribunal Contencioso la Función Electoral, ésta terminaría con su existencia. Rechaza de plano esta pretensión, sin embargo de lo cual, considera que deben comparecer ante la Corte Constitucional, pero su cuestionamiento es ¿Si acuden pierden jurisdicción y competencia, por ser parte interesada, al momento que tengan que juzgar y dictar sentencia respecto de esta acción extraordinaria?

El señor Dr. Jorge Moreno recuerda que la Corte Constitucional asume las competencias que se encuentran establecidas en la Constitución, por lo que avoca conocimiento de todo lo que le llega, por tanto a su criterio deben comparecer en este litigio y tratar este asunto en su fondo, partiendo del tema electoral. Expresa que revisado el expediente del Movimiento MAPO, no se encuentra el acto por el cual sus representantes acudieron ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque los recursos son contra las resoluciones que emana el Consejo Nacional Electoral y los Órganos Electorales Desconcentrados, no existe resolución de la Junta Provincial Electoral del Azuay, lo que hizo el movimiento, es recurrir ante el Tribunal con un recurso denominado de apelación, sosteniendo que se le ha negado la posibilidad de inscribir candidaturas, presumiendo probablemente estarían ante un acto ficto, y no ante un acto expreso, por ahí tiene que ser el argumento de la defensa, porque en ninguna parte del expediente consta que la Junta Provincial Electoral haya aceptado o rechazado la calificación, registro o inscripción de las candidaturas a alcalde y concejales, los formularios de inscripción de las candidaturas vienen suscritas por la alianza "Movimiento Encuentro Democrático" y "Movimiento de Acción de los Pueblos Organizados", esa fue la documentación que presentaron ante la Junta Provincial, se pregunta ¿Llegará la competencia de la Corte Constitucional para disponer la suspensión de las elecciones de concejales y alcalde en Camilo Ponce Enríquez y que se realicen en la segunda vuelta electoral? de ser así, la propia Corte Constitucional pondría en peligro la organización del proceso electoral, abriendo las puertas para que cualquiera pueda presentar recursos de esta naturaleza.

La señora Presidenta considera que deben adoptar decisiones y definir una estrategia de defensa, la propuesta podría ser un informe motivado que se origine en primera instancia del despacho que conoció el proceso y que presentó la ponencia, para que posteriormente sea conocido por el Pleno, esa sería la argumentación de la defensa, a la cual comparecería la Coordinadora Jurídica y los asesores que se incorporen como procuradores judiciales.



El señor Dr. Arturo Donoso recuerda que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral son de única y última instancia en materia electoral, por lo que deben informar a la Corte Constitucional, que no van a presentar ningún informe motivado y que lo único que remitirán es la sentencia dictada por el Tribunal.

La señora Dra. Alexandra Cantos manifiesta que los jueces no tienen por qué dar explicaciones, por lo que no tienen que emitir informe alguno, consulta ¿cuál sería el riesgo y cuales las consecuencias de comparecer? y ¿hasta dónde el Tribunal de Contencioso Electoral puede dejar abiertas puertas para que se presenten otros recursos?

La señora Dra. Ximena Endara da a conocer que el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción y competencia privativa para resolver todo lo relacionado al proceso electoral, por lo que si concurren ante la Corte Constitucional podría ocurrir que se acepten otras acciones de protección contra otras sentencias del Tribunal, lo que les traería dificultades, porque los plazos para presentar acciones extraordinarias de protección no se encuentran definidos. La Constitución y el Régimen de Transición determina claramente que son jueces de primera y única instancia en materia electoral, por lo que si alguien tiene una queja, durante y después del período electoral, tiene que presentarlo ante los únicos competentes para conocerla que es el Tribunal Contencioso Electoral; sin embargo, parecería que este criterio no es compartido por la Corte Constitucional porque acogió esta acción extraordinaria de protección, por su parte pensó que se autocontendría e inhibiría de hacerlo, pero no es así. Considera que es necesario reflexionar y analizar qué es lo pertinente, comparecer o acudir a la audiencia representados por un procurador, lo que podría abrir las puertas para que se presenten unas cinco o seis acciones de protección adicionales.

El señor Dr. Jorge Moreno realiza un análisis histórico del proceso de institucionalidad política jurídica de los estados, el cual establece el estado liberal clásico dejando de lado al estado absolutista en el cual se concentraba el poder en una sola persona, pero con un nuevo esquema que se denomina poder compartido o poder separado, el cual pretendía que entre ellos se autocontrolen o autoregulen, de tal manera que ninguno sea superior al otro, rompiendo de esa manera la teoría conceptual de Juan Jacobo Rosseau, de la formación de la voluntad general a través de la democracia directa donde imperen las mayorías, lo que con el transcurso del tiempo podría constituirles en totalitarios y arbitrarios, este modelo fue superándose y evolucionando hasta tratar de establecer que la voluntad soberana se expresaba a través de legislar y que el soberano era el legislador; y, por tanto, la ley que dictaba era intocable, constituyéndose la Constitución en un simple documento político y programático, pero con la lucha contra el poder entramos en un estado de legalidad que por cuestiones de carácter formal probablemente entre a ser materia de discusión, hay un control a las decisiones que emanan de la



autoridad pública avanzando al Estado de derecho formal donde la ley puede ser materia de control, este último es el Estado de derecho de la legalidad, es el que se vivió hasta 1998, las leyes estaban hechas en base a ese modelo y la Ley Electoral también estaba hecha en base de ese modelo, había un Tribunal Constitucional con límites que no alcanzaba un control de la sociedad y el modelo que comienza a despegar en el mundo unifica el poder limitado de los norteamericanos y que en Inglaterra incluso podríamos hablar de un modelo de soberanía popular europea que comienza a unificar, entrando a una garantía de derechos fundamentales con sustento en el principio de la soberanía popular y democrático, el modelo que se inicia a partir de la segunda guerra mundial y lo van desarrollando los alemanes con el principio de la dignidad, le parece que tienen más de novecientos noventa volúmenes sobre resoluciones del Tribunal Constitucional y hacen un control de constitucionalidad en todos los ámbitos, y eso sucedió también en España en 1978, que comenzó ponderando sus resoluciones, pero también hay algunos problemas de subjetivismo porque las resoluciones de los norteamericanos en ese ámbito de la subjetividad ponderando principios básicos que también tienen problemas, avanzando en un modelo del test de la razonabilidad como también lo han hecho los italianos y aquí en América Latina lo están haciendo los colombianos y otros estados, por eso es que aparecen incluso en las resoluciones de los jueces de creación de derecho como son las Acciones de Amparo en Argentina para citar un caso, que sin tener el marco constitucional adecuado, lo fueron creando, nosotros lo que hemos hecho en la Constitución del 2008 es recoger todos esos principios de la doctrina y las resoluciones que se han ido desplegando especialmente en Europa coincidiendo ese jus positivismo y jus naturalismo, para dar justamente una Constitución eclética donde están plasmados estos principios, creando una Corte Constitucional que se encarga de realizar un control constitucional de los actos que emanan de todos los poderes públicos, por su parte sostiene que lo nuestro tiene una conceptualización política, que la Corte Constitucional debería indudablemente limitar sus actuaciones, sin embargo, le preocupó cuando escucho a las costarricenses decir que allá también cuando la Corte Constitucional entró en funciones abordó todos los campos para luego ir automáticamente limitándose, por esto sigue creyendo que en el ámbito nuestro hay una connotación política que está de por medio, la sistematización de los poderes del Estado.

El señor Dr. Arturo Donoso señala que la Corte Suprema de Costa Rica es el Tribunal de más alto nivel, la cual cuenta con una sala que hace el control constitucional, sistema jurídico coherente porque no existe un organismo sobre la Corte Suprema. Expresa que en todo Estado, la Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, debe ser una sala de la Corte Suprema que se encarga de realizar el control constitucional. Considera deben comparecer bajo protesta, dejando constancia que lo hacen por respeto a la Constitución e institucionalidad, por lo que no aceptan su jurisdicción ni su competencia, se



entrega copia de la sentencia y se les advierte que este Tribunal tiene la potestad de juzgarlos.

El señor Dr. Jorge Moreno sugiere que comparezcan adjuntando copia certificada del expediente, porque al parecer únicamente se ha presentado copia de la resolución y no del expediente, por lo que pretenden hacer un control de legalidad de las actuaciones del Tribunal, lo que no es de su competencia.

La señora Presidenta señala que deberán definir propuestas para comparecer y coincide que no deben entregar un informe motivado como así lo solicitan, la comparecencia debería ser para sentar claramente la competencia privativa en materia especializada electoral que tiene el Tribunal.

El señor Dr. Jorge Moreno considera que se está desviando al Tribunal Constitucional un asunto que no es de su competencia, lo que se trata es de la inexistencia de una resolución y de la cual impugnaron su negativa, pero que este Organismo como garantista de derechos en el ámbito constitucional dieron trámite, para analizar si existía o no tal cosa, sin embargo, tuvieron que rechazarla porque no existía tal acto, pero ese tema no de legalidad, menos constitucional.

El Ingeniero Juan Coloma recuerda que con la anterior Constitución se hizo prevalecer la independencia del Tribunal Supremo Electoral, en temas netamente electorales, hasta que un ex-Presidente acudió ante el Tribunal Constitucional abriendo de esa manera la posibilidad de que se presenten demandas a través de ese ente institucional. Recuerda la destitución de jueces, el Tribunal Supremo Electoral tenía esa facultad cuando cualquier persona pretendía interferir en el proceso electoral. Manifiesta su preocupación por las acciones de protección ante diferentes jueces, quizás fue una reacción un poco drástica pero la hubiera sido necesario abrir el expediente correspondiente, proceder a convocar a una audiencia y destituir a quien interfiera con el proceso electoral, de esa manera no hubieran llegado a la Corte Constitucional.

El señor Dr. Jorge Moreno manifiesta que estos son asuntos de carácter jurídico, eso lo ha reconocido América Latina en la doctrina y consta en el libro de Nohlen, donde se establece que el Tribunal Supremo Electoral tenía una carga jurisdiccional y por tanto eran jueces, así fue enfocado en la Ley, actualmente hay un cambio en el marco normativo, con un modelo más avanzado del Estado social de derecho.

El señor Ab. Rafael Balda señala que la Corte Constitucional no ha respetado el trámite establecido en el artículo 56 de su normativa de trámites, porque en el acto oficial además de avocar conocimiento primero tenía que notificar a la



institución judicial pertinente, que en caso somos nosotros, pero además debía comunicar a la contraparte del accionante, en este caso, la Junta Provincial del Azuay, para que, de considerarlo pertinente se pronuncie en el plazo de quince días, según consta de la providencia no han comunicado a la contraparte, mucho menos le han otorgado quince días y pretenden hacer la audiencia este lunes, por lo que si bien se están presentando ante la Corte Constitucional, el tema de la incompetencia es importante pero también debería señalarse que están vulnerando su propio procedimiento.

El señor Dr. Arturo Donoso propone: primero, que comparezcan; segundo, que lo haga la señora Presidenta como representante legal del Tribunal acompañada de un procurador o procuradores; tercero, que se lo haga bajo protesta con toda la argumentación expresada en la presente sesión, esto es que cada uno de los despachos envíe un asesor, preparen la estrategia de defensa y se entregue un documento contundente ante la Corte Constitucional.

Al efecto, el Pleno del Organismo aprueba por unanimidad la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN No 222-12-03-2009: Una vez que ha llegado a conocimiento de las señoras juezas y jueces que ha sido presentada una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, se resuelve que la señora Presidenta, en su calidad de representante legal del Organismo, comparezca, bajo protesta, a la audiencia convocada para el lunes 16 de marzo del 2009, a las 15H30, dejando constancia que lo hace por respeto a la institucionalidad del país; en razón, de que la sentencia dictada dentro del recurso contencioso electoral de impugnación signado con el número 07-2009, se lo hizo en el ámbito de las competencias determinadas en la Constitución de la República, por lo que la Corte Constitucional no tiene jurisdicción, ni competencia para juzgar los actos del Tribunal Contencioso Electoral. La argumentación expresada en la presente sesión deberá formar parte del escrito y argumentación que deberán preparar la señora Coordinadora Jurídica Institucional con el apoyo de la Coordinación de Asesoría e Investigación y los asesores de los diferentes despachos.

La señora Presidenta pone a consideración el escrito denominado de apelación presentado por el representante del Movimiento "Patria Altiva i Soberana", y su abogado patrocinador, contra una resolución del Consejo Nacional Electoral.

El señor Dr. Arturo Donoso sugiere que se declare reservado el tratamiento de este tema.

R. Ortiz



Al efecto, el Pleno del Organismo aprueba por unanimidad la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN No 223-12-03-2009: Que previo el tratamiento del escrito denominado de apelación presentado por el representante del Movimiento "Patria Altiva i Soberana", y su abogado patrocinador, contra una resolución del Consejo Nacional Electoral, se dispone declarar reservada la presente sesión.

Por haberse agotado los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidenta agradece la presencia de los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral y la clausura siendo las 12H30.

Dra. Tania Arias Manzano
**PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL**

Dr. Richard Ortiz Ortiz
SECRETARIO GENERAL